



EDITORIAL

Editorial. Corrupción en medio de la crisis y la pandemia

En medio de los sufrimientos generalizados y aparentemente interminables del pueblo filipino bajo la pandemia y los bloqueos opresivos, el régimen de Duterte aún se las arregló para despilfarrar, saquear y negar al pueblo su dinero por valor de varios miles de millones de pesos.

El pueblo filipino está totalmente indignado por las revelaciones hechas por la Comisión de Auditoría (COA) que muestran las anomalías del gobierno, especialmente en el manejo de los fondos de la pandemia que, insuficientes para empezar, fueron desperdiciados y malgastados. Indicativo de la corrupción generalizada y sistemática bajo el mandato de Duterte, casi todos los principales organismos gubernamentales fueron salpicados por las marcas rojas de la COA. En un intento de encubrir estas anomalías, Duterte intimidó al COA para que no publicara sus conclusiones.

Mientras decenas de miles de personas mueren de Covid-19, más de un millón de infectados, y mil-

lones pierden sus empleos y sufren la destitución y el hambre, estas anomalías son abiertamente criminales y los responsables deben rendir cuentas. Esto expone como falsa la afirmación de que la burocracia estatal reaccionaria sirve al pueblo. De hecho, es una carga que rompe las espaldas del pueblo.

El despilfarro y el mal uso del dinero del pueblo agravan aún más la crisis que azota al país y el sufrimiento de la población. Los fondos para la pandemia, groseramente insuficientes, despilfarrados y malgastados, incapacitan gravemente al país para superarla. Hay una grave carencia en las pruebas masivas, el rastreo de contactos, la vacunación y los esfuerzos para aumentar la ca-

pacidad de los hospitales públicos, medidas clave para derrotar la pandemia. Ha pasado más de un año y, sin embargo, las autoridades sanitarias siguen sin saber dónde y cómo se propaga la enfermedad.

Como consecuencia, la respuesta del gobierno va siempre por detrás del virus y, al final, sólo puede recurrir a repetidos cierres. Al confiar en los encierros militaristas como solución a la pandemia, Duterte está cargando contra la economía y los medios de vida de los filipinos de a pie.

Una gran parte de estas anomalías comprende los fondos no gastados que Duterte ha ordenado que sean centralizados por el Departamento de Presupuesto y Gestión. Muchos creen que esto forma parte de los esfuerzos para canalizar miles de millones de pesos de los fondos a la caja de guerra de Duterte, para verter en la economía a finales de

año o el próximo año para crear la ilusión de crecimiento, o para ser utilizado para comprar los votos y la lealtad de los políticos y para manipular los resultados electorales.

El pueblo está extremadamente asqueado de cómo Duterte está priorizando sus planes para perpetuarse en el poder frente a los sufrimientos generalizados de las masas filipinas que se derivan de su fracaso de gobierno y su total abandono. La corrupción que acompaña en el manejo de los fondos del gobierno se suma a la carga que sufre el pueblo.

Las pretensiones "anticorrupción" de Duterte se han revelado completamente huecas. Golpear a los pequeños burócratas no es más que un espectáculo para ocultar la corrupción a gran escala. Los peores corruptos son sus factótums más cercanos, los generales y los funcionarios de mayor confianza a los que, a pesar de haber sido expuestos y condenados, se les permite seguir despilfarrando y malgastando el dinero del pueblo. El régimen apesta por su putridez.

Debido al empeoramiento de la corrupción de Duterte, a su absoluta negligencia y a su aferramiento al poder, existe una creciente posibilidad de que se produzca una crisis de salud pública, económica y política más drástica en las próximas semanas y meses.

A medida que surgen mutaciones más potentes de Covid-19 como la variante Delta, existe una gran amenaza de que la pandemia se agrave más allá de la capacidad del sistema sanitario. Cada vez hay más enfermeras que renuncian por agotamiento en el trabajo y la demora de sus prestaciones.

Los hospitales se están quedando sin instalaciones y sin personal para atenderlas, por lo que muchos de los que caen enfermos ya no pueden ser tratados. Sin embargo, los repetidos cierres patronales siguen siendo la principal respuesta del régimen, lo que seguramente hundirá aún más la economía y la vida de la gente.

El régimen de Duterte está agotando la paciencia del pueblo. La sangre del pueblo hierve por cómo

los capitalistas burócratas corruptos priorizan su poder, sus vicios, sus carteras y bolsillos, mientras el pueblo sufre postrado. El pueblo busca dónde y cómo verter su furia hirviente contra el régimen.

Las fuerzas progresistas y revolucionarias tienen la responsabilidad de aglutinar la indignación del pueblo y convertirla en una poderosa arma para el cambio. Deben llegar a los millones de personas que buscan orientación y luz sobre el camino para defender sus derechos e intereses. Deben superar las restricciones del bloqueo y del régimen fascista para despertar, organizar y movilizar a las masas a lo grande.

El régimen de Duterte se esfuerza por desunir al pueblo mediante el engaño, las mentiras, las amenazas y la violencia. Esto debe ser igualado por los esfuerzos incansables para unir a la juventud, los trabajadores, los campesinos, los pobres, las mujeres, las enfermeras y los médicos, los maestros y otros empleados ordinarios. Los diferentes sectores deben estar firmemente unidos para manifestar en todo momento la profunda ira por la actual crisis causada por Duterte y sus secuaces.

Anticiparse a cualquier giro o cambio rápido de la situación y aprovechar todas las oportunidades para reunir la fuerza de decenas de miles de personas en las calles y reunir el más amplio abanico de fuerzas para enfrentarse al régimen corrupto, fracasado, traidor y fascista.

Como guía, el Partido debe enseñar que, por un lado, la corrupción sistemática del gobierno de Duterte agrava aún más la crisis, la pobreza y el sufrimiento del pueblo. Por otro lado, esto también es un síntoma de la crisis irresoluble y agravada del sistema gobernante que sólo puede terminar a través del derrocamiento armado revolucionario del estado reaccionario, títere y burocrático-capitalista. **AB**

| | |
|--|--|
|  <p>Vol LII No 16 21 de Agosto 2021</p> <hr/> <p>Ang Bayan se publica en Pilipino, Bisaya, Iloko, Hiligaynon, Waray, Inglés y Español. Ang Bayan agradece las contribuciones en forma de artículos y noticias. Se anima a los lectores a enviar sus comentarios y recomendaciones para mejorar nuestro periódico.</p> <p> @prwc_info</p> <p> fb.com/editorsofAB</p> <p> cppinformationbureau@gmail.com</p> | <h2 style="text-align: center;">Contenidos</h2> <p>Editorial: Corrupción en medio de la crisis y la pandemia 1</p> <p>Utilización anómala de los fondos para la pandemia 3</p> <p>Hambre y penurias bajo el ECQ 4</p> <p>Despreciable campaña de las AFP para denigrar al NPA 5</p> <p>Los residentes frustran la construcción del campamento de las AFP 5</p> <p>Ka Parts Bagani, artista del pueblo 6</p> <p>8 acciones armadas en 6 provincias 6</p> <p>Protestas 6</p> <p>Apropiación de las tierras de cultivo de Masbate 7</p> <p>Aumento del precio de los fertilizantes 7</p> <p>Se retiran los cargos contra 9 activistas 8</p> <p>Los soldados asesinan al líder de Mangyan 8</p> <p>La ilusión del crecimiento del 11,8% del PIB 10</p> <p>En Resumen 10</p> <p>Estados Unidos es expulsado de Afganistán 10</p> |
| <p>Ang Bayan es una publicación quincenal del Comité Central del Partido Comunista de Filipinas</p> | |

Anomalías en la utilización de los fondos de la pandemia

Rodrigo Duterte se enfrentó a una reacción violenta después de que el 16 de agosto criticara e intimidara a la Comisión de Auditoría (COA) para que dejara de publicar informes que revelaban el uso anómalo de fondos para la pandemia por parte de varios organismos del gobierno reaccionario. Al día siguiente, el Secretario del Departamento de Salud (DOH), Francisco Duque III, despotricó de que su organismo había sido "destruido" por la COA después de exponer su utilización anómala de los fondos sanitarios durante los momentos críticos de la pandemia de Covid-19. Esta negligencia y el despilfarro de fondos públicos es criminal, especialmente en medio de la pandemia. Esto ocurre mientras se han perdido más de cien mil vidas, y mientras millones de personas han perdido sus empleos y se han sumido en la pobreza.

El COA señaló al Departamento de Salud por las deficiencias en la gestión de los fondos para la pandemia, así como por las irregularidades y retrasos en la adquisición de equipos y suministros médicos.

En particular, la Comisión de Auditoría señaló deficiencias en la gestión de los fondos para la pandemia por valor de más de 67.320 millones de pesos en 2020. Según la comisión, aproximadamente 11.890 millones de pesos asignados para mejorar el sistema sanitario no fueron utilizados debido a las deficiencias del Departamento de Salud. El COA también cuestionó el valor de 95,15 millones de pesos de medicamentos caducados o casi caducados y otros suministros médicos en su inventario. También señaló al Departamento de Salud por el sobreprecio de hasta 1.000 millones de pesos en mascarillas y protectores faciales adquiridos por el Departamento de Gestión Presupuestaria (DBM) con fondos para la pandemia. El Departamento de Salud habría transferido 42.000 millones de pesos de fondos para la pandemia al Departamento de al DBM para la adquisición de suministros médicos sin la documentación adecuada.

Además, el Departamento de Salud no documentó correctamente 539,29 millones de pesos utilizados para compensar a los trabajadores sanitarios, 275,9 millones de pesos para "dietas de comida" y 11,66 mi-

llones de pesos para indemnizaciones por fallecimiento y enfermedad de los trabajadores sanitarios. Tampoco documentó unos ₱1.400 millones en donaciones recibidas en el mismo año.

Departamento de Bienestar Social y Desarrollo. El departamento fue señalado por 780,71 millones de fondos no utilizados para su Programa de Mejora Social (SAP), que podría haber beneficiado a 139.300 personas. También se le cuestionó por distribuir 4.360 millones en fondos del SAP en seis regiones sin la documentación adecuada. En suma, el departamento registró una deficiencia de ₱5.460 millones.

Departamento de Trabajo y Empleo. Los auditores señalaron a este organismo por la insuficiencia de las medidas de control interno en la concesión de ayudas a los trabajadores y emigrantes desplazados por la pandemia. Constataron varias irregularidades, como el pago excesivo de ayudas a 213 beneficiarios por valor de ₱1 millón. También descubrieron que algunos beneficiarios no pudieron recibir ninguna ayuda o se quejaron de haber recibido menos de la cantidad de ayuda comunicada. Alrededor de ₱22,34 millones de ayuda financiera no reclamada también permanecen depo-

sitados en centros de envío de dinero. El departamento también fue llamado a filas por un valor de 1.570 millones en anticipos de efectivo no liquidados a los trabajadores.

Junta de Franquicia y Regulación del Transporte Terrestre. Sólo el 1% del presupuesto de 59 millones de pesos para el Programa de Contratación de Servicios, que supuestamente tiene como objetivo emplear temporalmente a los conductores desplazados por las restricciones de la cuarentena, fue utilizado por la agencia. Ni siquiera la mitad de los 60.000 conductores beneficiarios previstos se registraron en dicho programa.

Departamento de Agricultura. Alrededor de 2.200 millones de pesos en fondos Bayanihan 2 asignados para ayudar a los pequeños agricultores afectados por la pandemia no fueron utilizados por el departamento. Por el contrario, ha sido señalado por el pago excesivo de ayudas a los agricultores, que ascienden a 250,53 millones de pesos en el marco de sus cuatro programas. Esto incluye las ayudas concedidas a "agricultores no cualificados" y el pago doble o triple de ayudas a 14.058 beneficiarios. El departamento también fue denunciado por sobrevalorar los insumos agrícolas que distribuye a los agricultores.

Departamento de Educación. El departamento fue señalado por el retraso en la entrega de 1.390 millones de pesos a las divisiones escolares, en medio de la necesidad de fondos debido a la implantación de la enseñanza a distancia. Sólo se han comprometido 916 millones de pesos (41%) de los 2.230 millones de pesos asignados a sus seis oficinas regionales, mientras que sólo quedan sin comprometer 29 millones de pesos para otras siete oficinas regionales. El COA también denunció al departamento por la producción y entrega defectuosa, incompleta y lenta de los módulos de aprendizaje para la enseñanza a distancia. AB

Hambre y penurias bajo el ECQ

El nivel de cuarentena en la Región de la Capital Nacional (NCR), Bataan y Laguna se redujo a cuarentena comunitaria mejorada modificada (MECQ) del 21 al 31 de agosto, tras dos semanas de estar bajo cuarentena comunitaria mejorada (ECQ), la forma más estricta de bloqueo. La decisión se tomó mediante votación secreta de los miembros del Grupo de Trabajo Interinstitucional sin hacerla pública a su base.

El anuncio se hizo después de que el Departamento de Salud (DOH) informara de más de 14.000 nuevos contagios de Covid-19 el 19 de agosto. Al día siguiente, las nuevas infecciones aumentaron aún más, hasta 17.231, la cifra más alta desde la pandemia. Antes del ECQ de dos semanas, los casos diarios eran sólo 9.000. Según el departamento, esto se traduce en una tasa de positividad del 24% de los 60.000 individuos sometidos a pruebas. Esto demuestra la limitada capacidad de pruebas del país, ya que se estableció una tasa de positividad del 5% como norma para medir si un país estaba haciendo suficientes pruebas.

Hasta el 20 de agosto, más de 1,8 millones de personas se habían infectado con Covid-19 en el país. Más de 10.000 se han infectado diariamente en los últimos nueve días, y se espera que siga aumentando en las semanas siguientes.

En Metro Manila, el 73% de las camas de los hospitales para pacientes críticos ya están ocupadas, así como el 60% de las camas de aislamiento y el 67% de las camas de las salas. La tasa de utilización de las máquinas de ventilación también está ya en el 61%. En lugar de construir inmediatamente más instalaciones para alojar a más pacientes, la IATF ordenó a los hospitales que utilizaran las camas hospitalarias destinadas a los pacientes que no son de Covid-19 para alojar a los pacientes de Covid-19. Esto se llevó a cabo al tiempo que se negaba a contratar más hospitales, obligando a los médicos y enfermeras sobrecargados de trabajo a asumir más trabajo.

Sin embargo, parece que la verdadera razón por la que se redujo el estado de cuarentena en lugar de

ampliar la ECQ es la falta de fondos para la ayuda, que el propio Secretario General del Departamento de Interior y Administración Local, Eduardo Año, admitió.

Anteriormente, muchos capitalistas se opusieron a los planes de prolongar el cierre. Dijeron que muchos negocios ya han cerrado, y que otros más cerrarán si se prolonga el ECQ. Los datos de la Autoridad Nacional de Desarrollo Económico indican que se han perdido aproximadamente 150.000 millones de libras esterlinas en ingresos semanales a causa del cierre. Dado que la RNC representa un tercio de la economía, esto afecta gravemente a la economía local.

Debido a los sucesivos cierres desde 2020, aproximadamente entre 9,2 y 13,5 millones de filipinos han perdido sus empleos o se han convertido en subempleados en medio de la pandemia. Además, unos 444.000 también han perdido su empleo durante las dos semanas de ECQ.

En lugar de reforzarse, el sistema de salud pública y la condición de los trabajadores sanitarios sigue deteriorándose. Según la Asociación de Enfermeras de Filipinas, aproximadamente el 40% de todas las enfermeras locales renunciaron a sus puestos de trabajo desde el año pasado por estar sobrecargadas de trabajo, mal pagadas y sin recibir los beneficios adecuados, como el subsidio por riesgo especial y la paga por riesgo activo. De las aproximadamente 30.000 enfermeras que trabajan en hospitales privados, unas 13.000 son contractuales. Las enfermeras amenazaron con dimitir en masa debido a la sobrecarga de trabajo y a la denegación de sus prestaciones.



Los legisladores también criticaron la ayuda simbólica de 4.500 millones de pesos de la que presumió Año. Los datos del agregador de datos en línea iPrice indican que la ciudad de Manila tiene el segundo coste de alquiler más alto entre las seis ciudades del sudeste asiático incluidas en su investigación, junto a Singapur. Citando el estudio, el representante de Bayan Muna, Carlos Zárate, dijo que el coste medio mensual de la vida en la RNC es de 50.800 pesos, o 28.800 pesos sin contar el alquiler. Cada persona necesita aproximadamente 7.000 pesos semanales para sobrevivir. La subvención de ₱1.000 a los individuos es incluso menor que el salario de dos días que recibe un asalariado mínimo en la RNC, y apenas superior al salario diario de ₱1.058 para una familia de cinco miembros. Incluso una ayuda de ₱4.000 por familia no es suficiente para llegar a fin de mes. Los datos de iPrice indican que una familia de cuatro miembros necesita al menos ₱57.600 cada dos semanas para vivir decentemente, más que ₱4.000.

En medio de esto, el régimen impulsó la aplicación de restricciones a la circulación de las personas y las llevó al paredón en nombre de la pandemia. Sólo en la RNC, la policía detuvo a 108.777 personas por supuesta violación de los protocolos sanitarios, principalmente por motivos económicos. En la noche del 7 de agosto, un tanod de barangay mató a tiros al carroñero Eduardo Geñoga Sabado en el barangay 156 de Tondo, Manila, tras ser detenido por violar las restricciones del toque de queda. Geñoga padecía una enfermedad mental.

AB

La despreciable campaña de las AFP para vilipendiar el compromiso del NPA con los derechos de las mujeres

Las Fuerzas Armadas de Filipinas (AFP) han hecho en los últimos años una campaña para vilipendiar al Nuevo Ejército del Pueblo (NPA), difundiendo despreciables mentiras sobre "abusos" contra las mujeres. Basó sus acusaciones en "pruebas" de píldoras anticonceptivas, preservativos y kits de pruebas de embarazo confiscados en los campamentos del NPA durante los encuentros que, según ellos, son "pruebas" de "esclavitud sexual".

Todo ello a pesar de que se trata de suministros médicos para una planificación familiar responsable. En contra de las mentiras que difunden las AFP, el uso de estos suministros demuestra la promoción de los derechos de las mujeres a la salud reproductiva en el movimiento revolucionario. Las mentiras no sólo son maliciosas, sino que demuestran el fanatismo y el desprecio del ejército reaccionario hacia las mujeres.

Los miembros del NPA promueven activamente los derechos y el bienestar de las mujeres, especialmente los de las combatientes rojas. Esto está estipulado en los ocho puntos de atención del NPA: "No te tomes libertades con las mujeres". Este principio se mantiene en todos los frentes de la guerrilla, especialmente en las relaciones y los asuntos conyugales. Aquellos que lo violan reciben las medidas disciplinarias correspondientes.

El movimiento revolucionario tiene políticas en materia de matrimonio, así como de anulación y divorcio. Parte de esto es el reconocimiento de los derechos de las mujeres y las parejas a la salud reproductiva y la planificación familiar en el ejército popular. Las unidades del NPA asignan recursos para garantizar las necesidades anticonceptivas. En el ejército popular se mantienen activamente debates sobre el establecimiento de familias revolucionarias y la anticoncepción.

El historial de abusos de las AFP contra las mujeres

Las AFP y el NPA son directamente opuestos en cuanto a la defensa de los derechos de las mujeres. El propio Rodrigo Duterte, comandante en jefe de las AFP, ordenó disparar a las combatientes rojas en la vagina. Es famoso por su misoginia y por incitar a soldados y policías a cometer crímenes contra las mujeres.

Los abusos de las AFP contra las mujeres y los menores están muy extendidos. Suelen perpetrarse durante la realización de operaciones militares del Programa de Apoyo Comunitario Reforzado (RCSP), en las que acampan en las comunidades durante largos periodos de tiempo.

El año pasado se informó de que los soldados citaban a las mujeres residentes en Sitio Tapayanon, Barangay Gupitan, Davao del Norte, todos los sábados para elegir a



quiénes violarían. Esto dio lugar a numerosos casos de embarazos no planificados en dicha comunidad que devastan a las familias de los residentes. En 2018, un soldado del 54º IB violó a una joven de 16 años en Tinoc, Ifugao. Durante el mismo año, otro soldado habría acosado sexualmente a otra mujer en Barangay Lob-ong, Asipulo.

En Ifugao, los soldados también tienen fama de mantener relaciones extramatrimoniales con mujeres. Al parecer, un soldado también orinó delante de una niña menor de edad, mientras que otro gritó: "¡Las vírgenes aquí sólo valen doscientos pesos!" en una comunidad de Asipulo.

En una entrevista publicada por Daba-Daba, la publicación revolucionaria de Panay, los padres afirmaron: "Estamos más seguros de dejar a nuestras hijas en un pelotón del NPA que de dejarlas en presencia de soldados." AB

Los residentes se oponen a la construcción de campamentos militares en Quezón de nuevo

Los concejales y vigilantes de San Francisco-B, López, Quezón, encabezaron la acción masiva para detener la construcción prevista de un campamento militar en su comunidad el 7 de agosto. Los residentes desalojaron colectivamente a los soldados que estaban desplegados en la zona para construir un destacamento. Los funcionarios del barangay dijeron que los residentes se quejaron inmediatamente al conocer la noticia del plan de los militares.

Esta fue la quinta vez que los residentes de Quezón lograron desalojar los campamentos militares en su comunidad desde mayo. Anteriormente, los residentes ya desalojaron a los soldados de sus comunidades en Sta. Elena y Cawayan, en López, y en Vista Hermosa y P. Herrera, en Macalelon.

Ka Parts Bagani, luchador rojo y artista del pueblo

Elementos conjuntos del 5º Batallón de Fuerzas Especiales y la policía local ejecutaron sumariamente a Jhon Niebres Peñaranda, más conocido como Parts Bagani, de 54 años de edad, oficial del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) en la región de Mindanao del Sur y reconocido artista revolucionario, en Barangay Cannery Site, Polomolok, Cotabato del Sur, el 16 de agosto. Estaba desarmado y era incapaz de defenderse.

Ka Parts es conocido dentro y fuera del movimiento revolucionario como un destacado pintor e ilustrador revolucionario radicado en el NPA. Procedía de la clase pequeñoburguesa, pero ofreció toda su vida y su intelecto para defender a las masas oprimidas. Mientras sostenía un armalite y realizaba trabajos militares y de masas, produjo obras de arte que reflejan las aspiraciones del pueblo por liberarse de la opresión, la explotación, el hambre y la pobreza, y por la liberación nacional y social.

Aunque es conocido por sus obras de arte como artista revolu-

cionario, Ka Parts fue principalmente un combatiente rojo y un cuadro militar del NPA. Tiene una rica experiencia en la guerra, en sus avances y retrocesos, en la dirección de ofensivas tácticas y en el estudio del arte de la guerra. Se puso las pilas a la hora de hacer planes para fortalecer aún más la capacidad del NPA y de los combatientes rojos en la lucha armada.

Supo aprovechar al máximo su talento para dibujar planes de ofensivas tácticas. Su contribución al avance de la revolución armada en el sur de Mindanao y en otras partes de Mindanao es excepcional. AB

8 acciones armadas en 6 provincias

Unidades del Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) montaron ocho ofensivas en Negros Oriental, Samar del Norte, Mindoro Oriental, Surigao del Sur, Capiz y Agusan del Norte del 25 de julio al 14 de agosto. Al menos ocho soldados murieron en estas acciones.

Un elemento del 62º IB fue asesinado durante una operación de acoso del NPA en Negros Oriental el 11 de agosto. Un policía también resultó herido durante la operación armada en Los Ángeles, ciudad de Butuan, el 27 de julio. Otro soldado fue asesinado en Barangay Victory, Las Navas, en Samar del Norte, el 9 de julio.

Oriental Mindoro. Cuatro policías murieron y otros dos resultaron heridos tras ser atacados por el NPA-Mindoro en su campamento de Barangay Panaytayan, Mansalay, Mindoro Oriental, el 4 de agosto. El NPA también atacó un convoy militar con seis vehículos en Sitio Tambangan, Barangay San Juan,

Bulalacao, el 14 de agosto.

Capiz. El NPA impartió justicia revolucionaria contra el cabo Frederick Villasis del 12º IB el 11 de agosto en Barangay Lahug, Tapaz. Se le confiscó una pistola Glock. Estuvo involucrado en la masacre y la detención masiva de Tumandoks el 30 de diciembre de 2020.

Surigao del Sur. Dos elementos de la 36ª IB resultaron heridos y otro murió durante una operación de acoso del NPA-Surigao del Sur en la frontera de Barangay Bayogo, Madrid, el 25 de julio. El NPA también disparó contra elementos del 75º IB que estaban rastreando Barangay Bolhoon, San Miguel, el 29 de julio. AB



Detener las canteras en Negros.

El 12 de agosto, los agricultores hicieron un llamamiento para detener las operaciones de cantera en la ciudad de Silay, Negros Occidental. Condenaron la deforestación indiscriminada y continua de la zona, que ha provocado inundaciones y la destrucción de sus tierras de cultivo. Una de las cinco canteras de la zona es propiedad del alcalde de Silay City, Mark Andrew J. Golez.

Se suspenden los despidos de Coca-Cola en Cebú.

Coca-Cola suspendió temporalmente su plan de despido de sus trabajadores tras alcanzar un acuerdo entre los trabajadores contratados y su principal contratista el 9 de agosto en Mandaue City, Cebú. Esto ocurrió después de que los trabajadores presentaran una queja ante la Junta Nacional de Conciliación y Mediación. Entre sus quejas se encontraban la represión sindical y las condiciones de trabajo inhumanas, en las que se obliga a los trabajadores a realizar otras tareas aparte de las suyas.

Protesta en la ciudad de Talisay.

Los empleados despedidos del Ayuntamiento de Talisay y del Distrito de Aguas de la ciudad de Bacolod se manifestaron el 9 de agosto ante la Comisión de Servicios Civiles de la ciudad de Bacolod para exigir su reincorporación.

Haran evacua el regreso a Talaingod.

Los 100 manobos restantes de Talaingod que se refugiaron en el Centro Haran de la UCCP en la ciudad de Davao decidieron finalmente regresar a sus comunidades el 9 de agosto, después de siete años. Se evacuaron en 2014 después de que sus comunidades fueran objeto de sucesivos ataques militares.

El acaparamiento de las tierras de cultivo de Masbate en nombre del ecoturismo

Más de 21.000 residentes perderán sus tierras de labranza y piscifactorías con la construcción del proyecto de Empresa Turística Internacional y Zona Económica Especial de Masbate de la empresa Empark Land Development Inc. El proyecto abarca más de 1.854 hectáreas de tierras agrícolas en siete barangays costeros de la ciudad de Dimasalang y cuatro de Palanas. Antes del proyecto, los residentes tenían prohibido desde hace tiempo pescar en unas 222 hectáreas de mar y manglares de la zona, ya que estaban declarados santuarios marinos. Sin embargo, incluso éstos van a ser destruidos con la construcción del proyecto por parte de Empark.

Rodrigo Duterte ha promocionado el programa como el mayor proyecto turístico. Huang Rulun, multimillonario chino y propietario de Empark, estrechamente vinculado a Duterte, invirtió más de 190.000 millones de libras en el proyecto. Huang se enfrenta actualmente a varios casos de corrupción en China. Al comienzo del mandato de Duterte, también dio ₱1.400 millones para la construcción de dos centros de rehabilitación de drogas.

Empark comenzó sus operaciones en abril de 2018 para convertir el área en una zona de ecoturismo que ha continuado incluso en medio de la pandemia. Casino, centros comerciales, hoteles, un campo de golf y un puerto se levantarán en la zona de este grandioso proyecto. Esto se suma a otras 50 instalaciones. Dado el gran alcance del proyecto, se prevé que su construcción no finalice hasta 2044.

Turismo para el capital extranjero

El régimen de Duterte está impulsando el fortalecimiento de las inversiones en la industria del turismo, incluso cuando estas han disminuido rápidamente durante la pandemia. En 2019, alrededor del 12,7% del producto interior bruto del país provino de la industria del turismo, superior a la cuota del 12,3% que registró el año anterior. El gobierno obtuvo ingresos de ₱466

mil millones, un 21% más que el año anterior. En 2019, las inversiones privadas en la industria del turismo se situaron en ₱569,1 mil millones.

A través de la Ley de la República 11262, el régimen de Duterte abrió aún más la industria del turismo a las inversiones extranjeras. La Autoridad de Infraestructuras Turísticas y Zonas Empresariales (TIEZA) ofreció numerosos incentivos a los inversores en las zonas empresariales turísticas (TEZ). Esto incluye exenciones fiscales de seis a 12 años, importación libre de impuestos y

aranceles de la inversión de capital, equipos y servicios, arrastre como una deducción de los ingresos brutos durante seis años, y otros beneficios. También se permite a los inversores arrendar terrenos durante un máximo de 75 años.

Esta es la misma oferta que TIEZA ha extendido a 12 TEZs prioritarias en nueve provincias. Esto incluye 20 clusters turísticos en el país, cuyo objetivo es que el Departamento de Turismo genere unos ingresos de 3,9 mil millones de pesos al final del mandato de Duterte. Dentro de estas TEZs prioritarias, la TIEZA venderá al menos 2.000 hectáreas de tierra y zonas de pesca.

En todo el país, el régimen de Duterte está decidido a que todas las tierras agrícolas cultivadas por los agricultores sean tituladas para venderlas a los promotores. En 2019, Duterte ordenó al Departamento de Reforma Agraria que acelerara el proceso de conversión de uso de las tierras agrícolas.

Además de utilizarse para proyectos turísticos, estas vastas tierras se venden a plantaciones capitalistas, empresas mineras y promotores inmobiliarios. AB



El aumento de los precios de los fertilizantes, una pérdida para los agricultores

EL KILUSANG MAGBUBUKID ng Pilipinas (KMP) informó el pasado 12 de agosto que el precio de los fertilizantes aumentó entre 200 y 400 libras esterlinas por saco en los últimos dos meses. Los datos del Departamento de Agricultura (DA) indican que el precio de la urea comprimida es de ₱1.415,99 por saco, ₱1.393,32 para la urea granulada, ₱778,79 para el amosul, y ₱1.268,19 para el completo. Los precios son casi el doble de los registrados el año anterior.

El fertilizante se aplica en casi el 85% de los arrozales y las explotaciones de hortalizas del país. Los agricultores pidieron al Departamento de Agricultura que investigara el aumento de los precios, y le instaron a no liberalizar la importación de fertilizantes caros. Simultáneamente a la subida de los precios de los fertilizantes, también aumentó el precio de los productos petrolíferos y de los pesticidas.

Los tribunales y la fiscalía deshacen los cargos falsos contra 9 activistas

Dos tribunales regionales y fiscales desestimaron sucesivamente los cargos falsos presentados contra siete activistas en Metro Manila, Albay y General Santos City, y dos miembros del Frente Democrático Nacional de Filipinas (NDFP).

El 4 de agosto, el Tribunal Regional de Legazpi, en Albay, desestimó la acusación de tráfico de armas contra el pastor Danilo Balucio. Anuló la orden de registro utilizada por la policía para allanar su residencia y detenerlo el pasado mes de mayo, ya que ésta "no se basaba en información verificada personalmente".

El 13 de agosto, la fiscalía también desestimó los cargos de secuestro y no devolución de un menor presentados contra los activistas juveniles Elaine Edzel Emocling, Christine Joy Dual, Alex Danday y Alfie Omega. Los cuatro estaban acusados de reclutar para el ejército popular y secuestrar a una activista estudiantil llamada "Trisha". Los fiscales aclararon que la participación en las protestas no es lucha armada.

El 12 de agosto, el Tribunal Regional de Primera Instancia de la ciudad de

General Santos desestimó los cargos de posesión ilegal de armas de fuego y explosivos contra la pareja Edgar y Regina Patulombon, que fueron detenidos por la policía en 2015 basándose en pruebas falsas de armas de fuego y explosivos. Los cargos fueron retirados porque los agentes que los detuvieron no informaron a la pareja de sus derechos cuando fueron detenidos y sometidos a investigación.

El 19 de agosto, un tribunal de Ciudad Quezón también anuló la orden utilizada por las fuerzas estatales para allanar y colocar pruebas de armas de fuego y explosivos en la residencia de la pareja Alexander en Winona Birondo en 2019. Ambos son personal del NDFP en las negociaciones de paz. **AB**

Los soldados asesinan al líder de Mangyan

Tres agricultores fueron asesinados y otros siete detenidos por agentes estatales armados en las últimas semanas.

En Mindoro Occidental, la 203ª IB mató al antiguo líder indígena Baduy de la Cruz en Sitio Cawit, Barangay Gapasan, el 29 de julio. Llevaba mucho tiempo siendo vigilado y coaccionado por los militares para que se "rindiera". En Samar del Norte, el 20º IB asesinó a Nilo Ogatcho, capitán de barangay de Victory, Las Navas, el 19 de agosto. La unidad local del NPA en la zona dijo que el asesinato fue un acto de represalia de los militares por la muerte de un soldado durante una ofensiva del NPA en el mismo barangay el 9 de julio. Elementos del 63º IB mataron a Juddy Ragawdaw, antiguo miembro de una organización campesina, durante la primera semana de junio en Barangay Loog, Basey, Samar Occidental.

Detención ilegal. La Brigada 203 y la policía detuvieron a un agricultor identificado sólo como "Ernesto Panganiban" en Barangay Lisap, Bongabong, Mindoro Oriental, el 6 de agosto. Fue detenido por soldados y policías para obtener la recompensa de ₱4,5 mil millones por este nombre inventado.

En Sibale, Romblon, cuatro agricultores que buscaban refugio para evitar el tifón del pasado 2 de julio fueron detenidos ilegalmente por policías y obligados a entregarse como miembros del NPA. Las víctimas, identificadas como Nolan Ramos, Benny Hilamon, Marlon Angelo Torres y Ma. Teresa Dioquino, fueron acusados de posesión ilegal de armas de fuego y explosivos.

La 62ª IB y la 94ª IB abordaron a George Francis y Eduardo Mission, residentes en Guihulngan City, Negros Oriental, el 3 de agosto. Francis aún no ha aparecido, mientras que Mission lo hizo en la comisaría de Binalbagan, Negros Occidental. El 3 de agosto, elementos del 94º IB ametrallaron indiscriminadamente las casas de las familias Ponsiano y Enríquez en Sitio Tibak, Barangay Santol, Binalbagan.

En Masbate, los concejales de barangay Virginia Esperanza Cabiles, Jinky Esperanza Villadolid y Dee Madrilejo fueron detenidos en Barangay Talisay, San Fernando, el 12 de agosto, tras ser acusados de tener vínculos con el movimiento revolucionario. Consiguieron escapar en un primer momento, pero posteriormente fueron detenidas en Masbate City. **AB**

La ilusión del crecimiento del 11,8% del PIB

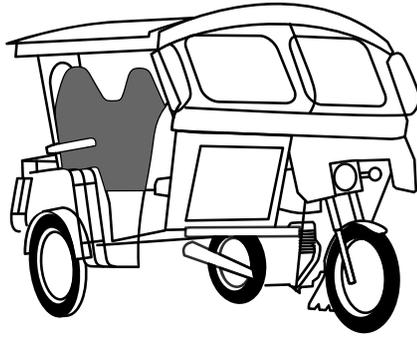
EL AUMENTO del 11,8% del producto interior bruto (PIB) de Filipinas durante el segundo trimestre del año es sólo un repunte respecto a los peores niveles. La cifra es relativa al descenso del 17% del PIB durante el mismo trimestre del mismo año, lo que hace que el ligero crecimiento parezca mayor. El crecimiento del PIB del segundo trimestre parece grande, pero en realidad sólo es un 0,7% superior al del primer trimestre del año. Además, se desaceleró un -1,3% durante el segundo trimestre. La Fundación Ibon prevé que el régimen no podrá mantener este "repunte" del PIB si no resuelve el problema generalizado del desempleo, los puestos de trabajo de baja calidad, la disminución o la ausencia de ingresos y la asistencia financiera.

Al mismo tiempo, la participación del sector agrícola cayó un 3,3% y un 1,5% durante el primer y segundo trimestre del año. Ello es consecuencia de la combinación de las medidas de liberalización total de la importación de carne y arroz, la ausencia de subvenciones a la producción de los agricultores, la ausencia de subvenciones a los agricultores, así como las restricciones a los viajes que afectan tanto a los productores como a los compradores.



#DejemosQue HableAlicia

Convocatoria de grupos de jóvenes para **exponer los abusos sufridos por Alicia Lucena** que fue **detenida ilegalmente por la NTF-ELAC** en convivencia con su madre agente, en una pequeña habitación de su casa familiar **desde el 19 de abril hasta el 15 de agosto.**

2,800

conductores de triciclos

lanzaron el proyecto "Un peso contra 174" en Dumaguete

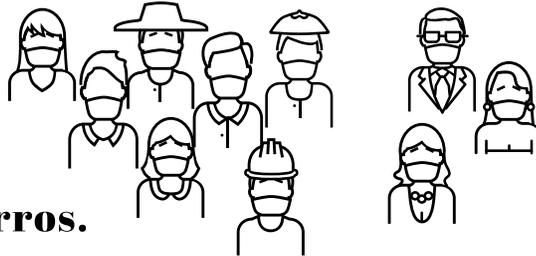
Su objetivo es **reunir donaciones** para apoyar las protestas y actividades continuas contra **el proyecto de recuperación** en la ciudad.

5

VECES QUE
MERCALCO
AUMENTO
LAS TARIFAS
ELECTRICAS

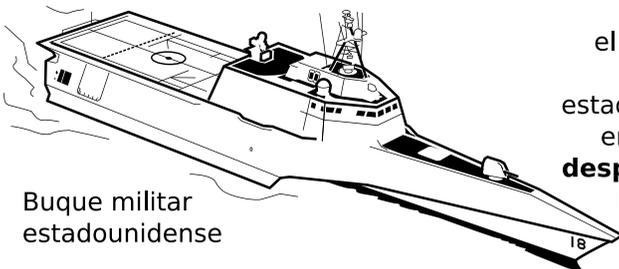
en los últimos 5 meses. En resumen, Meralco cobró una **tarifa adicional de 0,682 por kWh**, lo que equivale a 136,40 pesos al mes para quienes consumen hasta 200 kWh, y 341 pesos al mes para quienes consumen hasta 500 kWh.

7 de cada 10



filipinos no tienen ahorros.

Este número de familias aumentó a **2,3 millones** en el segundo trimestre de 2021 **desde los 1,9 millones** del último trimestre de .



Buque militar estadounidense

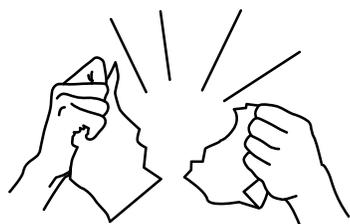
USS CHARLESTON que atracó en Manila

el 16 de agosto. Se trata del primer buque estadounidense que atraca en Filipinas desde 2019, **después de que Rodrigo Duterte asegurara a Estados Unidos que no derogará el Acuerdo de Fuerzas Visitantes.**

Solo se **permite el regreso a Filipinas** de

2,000

migrantes al día. Por ello, decenas de miles de migrantes filipinos siguen varados en el extranjero y sufren en diversas partes del mundo.



Día del Grito de Pugadlawin

23 de Agosto 1896

Más de 500 **katipuneros** liderados por **Andrés Bonifacio** rompen colectivamente sus cédulas para marcar el inicio de su levantamiento contra los colonialistas españoles.

9 nuevos multi-millonarios

surgieron durante el periodo de la pandemia

tras obtener **superbeneficios gracias** al desarrollo y **la venta de las vacunas contra la Covid-19.** Su valor combinado de 19.300 millones de dólares es suficiente para vacunar a toda la población de los países en desarrollo.

Fuente: The People's Vaccine Alliance

Estados Unidos es expulsado de Afganistán, los talibanes retoman el poder

La guerra ha terminado. Así lo declararon los talibanes el pasado 16 de agosto después de que sus combatientes tomaran Kabul, la capital de Afganistán, y pusieran fin a los 20 años de ocupación estadounidense y a su gobierno títere. Antes de que los talibanes entraran en Kabul, el presidente títere de Estados Unidos, Ashraf Ghani, ya había huido del país allanando el camino para el establecimiento de un nuevo gobierno. Los talibanes gobernaban el país cuando Estados Unidos inició su guerra de agresión en 2001. El grupo anunció que establecería el Emirato Islámico de Afganistán con su regreso al poder.

Los talibanes lanzaron su ofensiva para retomar el poder el pasado 4 de mayo, después de que Estados Unidos anunciara la retirada de sus fuerzas de combate del país. En dos meses, los talibanes se apoderaron de la mitad de los distritos del país, incluidos los territorios que antes controlaban sus señores de la guerra rivales. A pesar de ello, Estados Unidos menospreció al grupo, afirmando que su "ejército de 75.000 hombres" no podrá derrotar al Ejército Nacional Afgano (ANA) de 300.000 hombres que Estados Unidos entrenó, financió y armó.

El 6 de agosto, los talibanes tomaron Zaranj, su primera ciudad. Por esas fechas, Estados Unidos estimó la posibilidad de que la capital cayera en 90 días. En realidad, la toma casi sin obstáculos de Kabul y otras 20 capitales de ciudades se llevó a cabo en 10 días. Esto fue acompañado de una campaña de proselitismo y de promesas de amnistía a todos los soldados del ANA. El ejército títere no opuso resistencia y abandonó sus puestos, se rindió o desertó cuando sus ciudades fueron atacadas.

Estados Unidos entró en pánico para sacar a su personal del país el mismo 16 de agosto. Entre ellos se encontraban 2.500 trabajadores inmigrantes, 132 de los cuales son filipinos. Como muchos afganos y extranjeros expresaron su temor a la violencia, 60 países y las Naciones Unidas pidieron a los talibanes que permitieran salir del país a todo aquel que lo deseara.

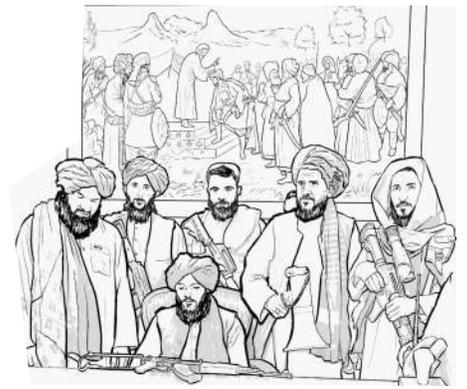
Legado de destrucción y pobreza

Los 20 años de ocupación estadounidense han dejado tras de sí una destrucción y una pobreza sin precedentes. Según una investigación de EE.UU., unos 3.487 soldados estadounidenses y sus aliados han muerto, así como 4.000 "contratistas" privados, 80.000 soldados afganos y más de 84.000 en el bando de la "oposición" en el transcurso de la "guerra para siempre" de 2001 a 2021. Se calcula que murieron hasta 875.000 civiles. Alrededor de 3,5 millones fueron desplazados debido a los encuentros.

Estados Unidos dilapidó hasta 2,26 billones de dólares de fondos públicos entre 2001 y 2021. La mayor parte (933.000 millones de dólares) corresponde a las Operaciones de Contingencia en el Extranjero del Departamento de Defensa, antes conocidas como sus "operaciones antiterroristas" en el extranjero.

Estados Unidos gastó 144.980 millones de dólares para la reconstrucción y 36.290 millones para establecer el gobierno títere sólo en los primeros 10 años de ocupación. Según el Inspector General Especial para la Reconstrucción de Afganistán, no menos del 20% de estos fondos fueron despilfarrados o embolsados por funcionarios locales afganos. Esto incluye el fondo de 1.000 millones de dólares para la construcción de escuelas que incluían a las niñas afganas, un programa que se utilizó para justificar la ocupación estadounidense.

Estados Unidos dejó la economía



local afgana hecha polvo. Su producto interior bruto sólo alcanzó una media del 2,5% entre 2015 y 2019. (Antes, su PIB crecía a una media del 8% debido a la expansión de las bases militares). Cayó a un 2,8 negativo el pasado 2020.

En ese mismo año, el desempleo subió al 37,9%, en gran parte por el cierre de las bases militares que empleaban a cerca del 40% de los afganos. (En Kabul, hubo una época en la que el 90% de su población estaba vinculada a las operaciones de la embajada y la base militar estadounidenses).

La economía afgana es frágil y depende de la ayuda internacional, según el Banco Mundial. En 2019, el 22% de su producto nacional bruto procedía de organismos internacionales. (Hubo un tiempo en el que el 80% de su presupuesto nacional y el 40% de su PIB se componía de ayuda extranjera).

No ha habido infraestructuras estables. La agricultura sigue sin desarrollarse, a pesar de que el 60% de la población depende del sector. Las actividades delictivas, como el contrabando y el cultivo de opio, ingrediente clave para la producción ilegal de heroína, son muy frecuentes.

La vida de los afganos empeoró con la pandemia de Covid-19. Alrededor del 75% dijo que no recibió ninguna ayuda del gobierno derrocado. Hasta un 36% dijo haber sufrido una crisis alimentaria. Alrededor del 72% de la población se encontraba por debajo del umbral de la pobreza, un porcentaje muy superior al 55% registrado en 2019.

AB